



Estructura de clases sociales en el mercado laboral hondureño, según el modelo de Erikson-Goldthorpe-Portocarrero (EGP)

1 Introducción

En Honduras, los análisis sobre temáticas como el mercado laboral, la desigualdad social y la pobreza tienden a enfocarse en la forma en que dichas condiciones se manifiestan en personas y hogares, usualmente mediante una caracterización de su magnitud, intensidad o frecuencia. No obstante, tales reflexiones frecuentemente están disociadas del análisis de las estructuras sociales y económicas, que imponen, desde un primer momento, una desventaja, en términos económicos, simbólicos y de acceso a recursos, sobre quienes viven y experimentan tales asimetrías. En otras palabras, la pobreza no solo se experimenta, sino que se hereda, ya que las condiciones económicas, familiares, así como la posición social en la cual una persona se encuentra inserta, son históricas y estructuralmente reproducidas.

En este sentido, el análisis de clases sociales emerge como una herramienta analítica y empírica clave para comprender cómo la posición social estructura las oportunidades y limita el acceso a bienes y servicios básicos, como la educación, el empleo digno, la salud o vivienda. En consecuencia, el análisis de clase social permite profundizar y contextualizar las interpretaciones comúnmente asociadas con la reproducción o persistencia de las desigualdades sociales, al reconocer que dichas desigualdades no son solo diferencias individuales o fallas del mercado, sino expresiones de relaciones sociales históricamente desiguales.

En el transcurso del siglo XXI, las clases sociales en Centroamérica y en América Latina han experimentado importantes procesos de transformación, y Honduras no es la excepción. En un contexto de reformas estructurales orientadas al mercado, reconfiguración productiva, flexibilización y segmentación del mercado laboral, precarización del empleo, migración y cambios demográficos, resulta fundamental analizar cómo están compuestas las clases sociales. Diversos estudios han abordado esta temática desde enfoques complementarios. Por ejemplo, Pineda Talavera (2018) y Briceño (2022) han contribuido al análisis de clase mediante caracterizaciones centradas en la propiedad de los medios de producción, la inserción en el mercado laboral, así como en el análisis de las ocupaciones y las condiciones estructurales de exclusión social.

Contar con un mapa de clases actualizado en un país resulta fundamental, ya que las clases sociales han mostrado su relevancia en las dinámicas de movilidad intergeneracional (Solís & Boado, 2016), en su relación con los derechos sociales en América Latina (Chávez Molina et al., 2022), así como en la persistencia de las desigualdades estructurales en la región y la influencia sobre las formas de estratificación y segregación en las estructuras urbanas, especialmente en países con un relativo desarrollo industrial (Sautu et al., 2020).

Este boletín de orden descriptivo aplica el modelo de clases sociales de Erikson, Goldthorpe y Portocarrero (EGP) a Honduras y se inscribe en la línea de esfuerzos previos orientados a caracterizar la estructura de clases sociales en el país (Llopis et al., 2024). En efecto, los datos muestran que la posición de clase sigue siendo un concepto clave para comprender las asimetrías sociales, económicas y simbólicas que se generan desde dichas posiciones.

Objetivo

El objetivo de este trabajo es describir de manera general la estructura de clases sociales en Honduras para el año 2024 y su relación con ciertas variables sociodemográficas. El creciente interés por estudiar las clases sociales proviene de una amplia literatura que, en los últimos años, ha optado por la utilización del modelo de Erikson, Goldthorpe y Portocarrero (EGP), el cual ha sido adaptado al contexto latinoamericano debido a sus bondades metodológicas y empíricas para construir un esquema estructurado y comparativo de clases sociales. En efecto, este modelo ubica a las relaciones laborales como un criterio central en la posición social que tienen las personas. Así, el tipo de trabajo que desempeña una persona, la jerarquía en relación con las condiciones de producción y las condiciones bajo las cuales lo desempeña son aspectos para tomar en cuenta.

El modelo EGP nace de los primeros esfuerzos para realizar una caracterización de clases sociales a partir de encuestas de hogares en países europeos, el cual posteriormente se extendió hacia otras regiones, con sus respectivas adaptaciones, considerando las condiciones económicas de los países y la disponibilidad de información.

Un primer criterio era establecer tres posiciones sociales con respecto al mercado de trabajo: a) empleadores, quienes compran fuerza de trabajo; b) los trabajadores por cuenta propia, quienes están en una situación que no venden fuerza de trabajo y no compran; y c) asalariados, los que venden su fuerza de trabajo. Una segunda distinción se asocia entre diferenciar a los asalariados tradicionales de quienes realizan actividades que se han asociado al «sector servicios». En este sentido, los mismos autores han señalado que el modelo EGP debe considerarse más una herramienta para la investigación empírica asociada con el análisis de composición de clase y movilidad social.

La composición de las clases sociales, como tercer elemento, se ha realizado mediante el establecimiento de criterios centrales para esbozarlas considerando el caso latinoamericano: la diferenciación entre condiciones de formalidad e informalidad, basada en las características estructurales del empleo y del aparato productivo; el reconocimiento de la heterogeneidad de los mercados de trabajo latinoamericanos, caracterizados por la precariedad laboral, segmentación y limitada movilidad ascendente, y el agrupamiento de ciertos sectores como élites económicas y administrativas. Siguiendo la adaptación para América Latina, se introduce el modelo EGP en siete macroclases, con sus respectivas subdivisiones (Chávez Molina et al., 2022).

La primera comprende a la clase de servicios, la cual agrupa a distintos grupos debido a su capacidad de gestión de recursos administrativos y gerenciales, así como a su nivel de jerarquía. Para el caso, gerentes en el sector público y privado en establecimientos más formalizados, pero también incluye a profesionales universitarios, docentes, técnicos, entre otros. La segunda agrupa a los trabajadores formales de rutina, que son asalariados que desempeñan labores rutinarias de oficina, pero en una posición distinta respecto a la clase de servicios. Comprende, para el caso, agentes, vendedores, cajeros, oficinistas y técnicos que no supervisan. La tercera clase engloba a los pequeños empleadores y trabajadores independientes (cuenta propia), estos últimos con diferentes grados de profesionalización; por ejemplo, en este caso puede entrar profesionales que ofrecen servicios, comerciantes individuales, agentes, vendedores, mecánicos, pintores, entre otros.

La cuarta clase se compone de los trabajadores formales con un grado alto o intermedio de calificación en sus actividades, los cuales se desempeñan en unidades productivas consideradas como formales. Este grupo abarca desde operarios, agentes, capataces, conductores, mecánicos, ensambladores o supervisores en distintos tipos de ramas económicas. También incluye a trabajadores manuales de baja cualificación que ostentan una posición jerárquica más básica. La quinta clase está comprendida por los trabajadores asalariados y por cuenta propia en el sector informal, con baja cualificación en pequeñas unidades productivas. Esto incluye una amplia heterogeneidad de profesiones como ventas ambulantes, limpieza, operadores, peones, cocineros básicos, conserjes, mensajeros y recolectores. La clase agrícola independiente, como sexta, agrupa a trabajadores por cuenta propia que desempeñan sus labores en la rama de actividades agropecuarias. Finalmente, la séptima está asociada con los trabajadores agrícolas asalariados, los cuales engloban al «típico» asalariado en la producción agropecuaria, que primordialmente ejecuta labores como peón, labrador o jornalero. En este caso, también se incluyen a los trabajadores familiares no remunerados agrícolas, dado su importante peso en las actividades de este rubro en el país.

2 Metodología

Los datos utilizados en este trabajo corresponden al año 2024, y se emplea como fuente de información la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La discusión descrita anteriormente permite establecer tres aspectos centrales a tomar en cuenta para la aplicación del modelo, a saber:

- i) La diferenciación entre condiciones de formalidad/informalidad con base en las condiciones productivas.
- ii) El reconocimiento de la heterogeneidad de los mercados de trabajo latinoamericanos, caracterizados por la precariedad y dualidad en su estructura.
- iii) El agrupamiento de ciertos sectores como élites económicas y administrativas.

Con el propósito de recuperar el esquema EGP en su adaptación latinoamericana, se utilizan tres criterios clave: ocupación actual de las personas en el mercado laboral de acuerdo con la información de la encuesta, su posición ocupacional y tamaño de la empresa. En primer lugar, se plantea la utilización del código ocupacional como criterio diferenciador del nivel de calificación del tipo de inserción laboral en el mercado de trabajo. Para ello, se utilizó como referencia el Clasificador Nacional de Ocupaciones de Honduras (CNOH, 2018), el cual permite identificar el código ocupacional de las personas y distinguir las distintas ocupaciones.

En segundo lugar, se introduce la segmentación entre empleo formal e informal a partir del tamaño de la unidad económica, clasificando como informal a toda persona que trabaja en establecimientos con menos de cinco ocupados, considerando las indicaciones establecidas en la literatura sobre el uso del modelo EGP adaptado para la región latinoamericana (Chávez Molina et al., 2022). Por lo tanto, se utilizó la pregunta acerca del tamaño de la empresa en este criterio. En tercer lugar, se considera la categoría ocupacional como un criterio adicional de diferenciación, distinguiendo entre asalariados, trabajadores por cuenta propia, empleadores y familiares no remunerados.

La implementación de este enfoque permite evaluar la robustez metodológica y utilidad empírica del modelo EGP para el análisis del caso hondureño, en un contexto de reconfiguración estructural de las clases sociales, una dimensión escasamente abordada. Esta limitada atención se explica, en parte, porque Honduras no figura en algunos análisis recientes sobre la temática realizados en América Latina, o porque en el ámbito académico nacional existe un rezago en la producción sistemática de estudios que reflejen la magnitud y profundidad de dichos cambios. Este primer acercamiento y aplicación del modelo EGP, por tanto, busca no solo contribuir a los esfuerzos ya existentes, sino también abrir nuevas líneas de investigación orientadas a comprender las transformaciones recientes en la estructura de clases en Honduras.

3 Resultados

3.1. Estructura general de las clases sociales

En la Tabla 1 se presenta el esquema de las siete macroclases descritas anteriormente y sus respectivas subdivisiones, que suman un total de quince subclases, junto con su distribución por sexo. Asimismo, la Figura 1 muestra la distribución porcentual de las siete macroclases. Los datos evidencian una estructura de clases caracterizada por una alta heterogeneidad, pero articulada en torno a ciertos «nichos» definidos por el nivel de calificación ocupacional y la condición de formalidad o informalidad laboral. Para el caso, los trabajadores altamente calificados ubicados en la macroclase de servicios especializados representan un 12.4 % de la fuerza laboral del país, es decir, gerentes, administradores de grandes empresas o profesionales en cualquier condición, ya sea como asalariados o cuenta propia. Por sexo, se identifica una mayor presencia de mujeres en las subclases como la gerencial y profesionales de baja graduación, pero las cifras absolutas son casi similares entre sexos, totalizando aproximadamente 459 mil personas pertenecientes a dicha clase. Estas cifras se analizarán con mayor detalle en su distribución porcentual específica de cada sexo más adelante.

En el caso de la macroclase de trabajadores rutinarios formales, en términos absolutos, se registra una mayor cantidad de mujeres que de hombres, aunque la diferencia entre sexo es relativamente baja, representando apenas el 5.6 % del total de personas ocupadas. Esta categoría está asociada principalmente a ocupaciones en el sector comercio, funciones administrativas básicas y otras actividades vinculadas a procesos de venta con cierto grado de formalización.

Las diferencias por sexo se evidencian con claridad en las subdivisiones de la tercera macroclase, correspondiente a pequeños empleadores y trabajadores independientes, los cuales agrupan a más de 973 mil personas. Sin embargo, es relevante destacar las situaciones particulares en cada una de las subdivisiones, como se muestra en la Tabla 1. En este caso, los empleadores y trabajadores independientes registran una mayor proporción de hombres

en comparación con las mujeres, quienes se concentran principalmente en el segmento de microempresarios con escasa contratación de obra permanente. Esta subclase presenta el 2.5 % de las personas ocupadas. Por otro lado, los autoempleados en ocupaciones calificadas y semicalificadas —personas que trabajan en diferentes actividades como comercio, servicio, construcción o de otro tipo—, pero que lo hacen solas o con el apoyo de un familiar, presentan una mayor participación femenina. En su conjunto esta macroclase representa aproximadamente el 26.3 % del total de personas ocupadas a nivel nacionales, es decir, casi un millón de personas, como aparece en el Figura 1.

La macroclase de trabajadores asalariados formalizados muestra un peso reducido dentro de la estructura de clases sociales en Honduras. En esta categoría se incluyen ensambladores, operarios, maquinistas, conductores y otras profesiones calificadas y no calificadas. Estas ocupaciones se vinculan con ciertos niveles de actividad industrial o manufacturera, representando apenas un 14.3 %, de la población ocupada. Esto corresponde a un segmento laboral que se desempeña en unidades económicas con más de cinco trabajadores, generalmente asociadas con ciertos niveles de cobertura en derechos laborales y acceso a seguridad social, aunque dicha cobertura no se extiende a todos los asalariados del sector. Esta situación puede explicarse por el bajo nivel de desarrollo del sector industrial y manufacturero en el país, particularmente en su modalidad a gran escala. Los datos también evidencian una clara masculinización de esta macroclase, con una mayor presencia de hombres en términos absolutos.

Tabla 1

Honduras: esquema de siete macroclases y quince subclases adaptado para Honduras, 2024

Macroclases	Clases sociales, subdivisiones	Hombre	Mujer	Total	%
Trabajadores de los servicios	Profesionales, administradores y oficiales de alta graduación, directivos de grandes establecimientos industriales y propietarios de grandes empresas	32,879	36,748	69,627	1.88 %
	Profesionales o autoempleados profesionales	49,474	38,871	88,346	2.39 %
	Profesionales, administradores y oficiales de baja graduación	148,882	153,000	301,882	8.16 %
Trabajadores formales de rutina	Empleados de rutina no manuales de alto nivel (administración y comercio)	48,869	42,840	91,709	2.48 %
	Empleados de rutina no manuales, ventas en grandes empresas (mayores a 5 empleados)	50,475	66,317	116,792	3.16 %
Pequeños empleadores y trabajadores independientes	Empleadores con menos de 5 ocupados	63,976	27,337	91,313	2.47 %
	Autoempleados en ocupaciones calificadas y semicalificadas	323,845	558,052	881,897	23.85 %
Trabajadores formales asalariados	Trabajadores manuales calificados y semicalificados en grandes establecimientos (mayores a 5 empleados)	263,333	105,967	369,300	9.99 %
	Trabajadores manuales no calificados en grandes establecimientos (mayores a 5 empleados)	103,892	54,738	158,629	4.29 %
Trabajadores asalariados y por cuenta propia en el sector informal	Asalariados de comercio de pequeños establecimientos (menores a 5 empleados)	37,773	61,120	98,893	2.67 %
	Autoempleados en ocupaciones no calificados	55,014	65,792	120,805	3.27 %
	Trabajadores manuales calificados y semicalificados en pequeños establecimientos (menores a 5 empleados)	213,633	55,971	269,603	7.29 %
	Trabajadores manuales no calificados en pequeños establecimientos (menores a 5 empleados)	133,805	102,704	236,510	6.40 %
Clase agrícola independiente	Trabajadores independientes del sector agrícola	234,450	30,279	264,729	7.16 %
Clase agrícola asalariada	Trabajadores asalariados y familiares no remunerados en actividades agrícolas	499,034	38,624	537,657	14.54 %
Total		2,259,333	1,438,359	3,697,692	100 %

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, EPHPM, 2024.

En América Latina, como resultado de su estructura productiva dual¹, es pertinente introducir una distinción de condición de informalidad en la esquematización de clases sociales. Esto obedece a que el mercado laboral, dependiendo de cada país, puede caracterizarse, por un lado, por un grupo de clases vinculadas a los sectores de servicios, comercio y otras actividades terciarias relativamente formalizadas y, por otro lado, por una mayoría de clases conformadas por trabajadores no calificados en condiciones de informalidad, especialmente en actividades agrícolas, como es el caso nacional. En consecuencia, en un país como Honduras, en el cual prácticamente 7 de cada 10 personas trabajan en unidades productivas compuestas por menos de 10 personas, resulta importante introducir esta diferenciación. Por esta razón, fue pertinente introducir la clasificación formal/informal a partir de la condición de trabajar en una unidad productiva que emplea a menos de 5 personas.

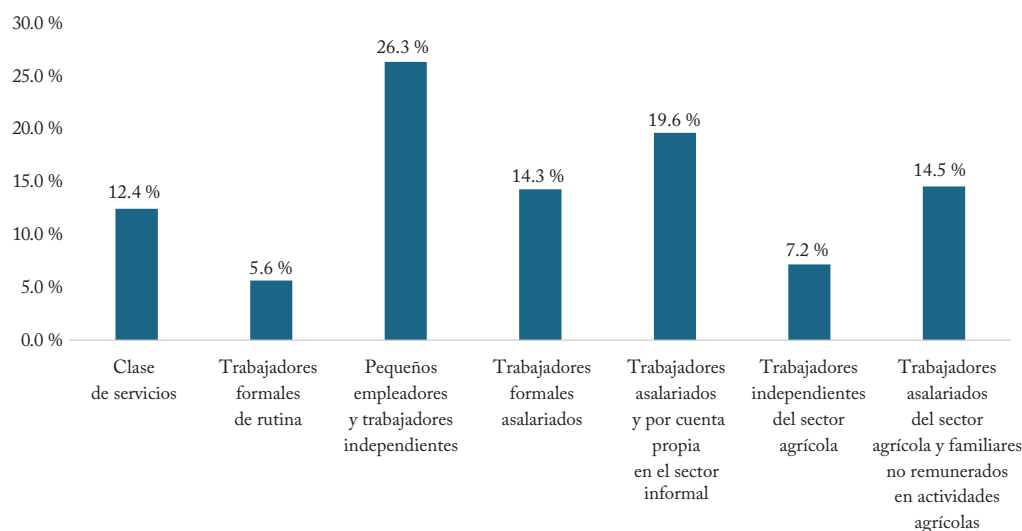
En este sentido, la macroclase de asalariados y trabajadores por cuenta propia en condiciones de informalidad agrupa una amplia variedad de ocupaciones y formas de inserción al mercado de trabajo: desde vendedores ambulantes, microcomerciantes, albañiles, dependientes, cocineros básicos, servicio doméstico asalariado, limpieza, entre otros. Por esta razón, esta macroclase se desagrega en cuatro subclases, como aparece en la Tabla 1. En general, este heterogéneo grupo de clases comprendió el 19.6 % de la población ocupada, evidenciando una mayor presencia masculina en términos absolutos.

El peso de las clases agrícolas evidencia tres aspectos clave de la estructura social del país. En primer lugar, los datos muestran una marcada masculinización de estas clases, con una ubicación creciente de los trabajadores en actividades asalariadas dentro del sector agrícola. Un segmento importante de los hombres se desempeña laboralmente en estas clases, sumando más de 700 mil personas, de las cuales menos de un tercio corresponde a trabajadores agrícolas por cuenta propia.

Esta situación refleja las tendencias de desagregación progresivas del campo señaladas por Cristóbal Kay, asociadas a los diferentes grados de asalarización² que existen en las zonas rurales (Kay, 2016). No obstante, las cifras continúan mostrando una baja participación femenina en las clases agrícolas.

Figura 1

Honduras: distribución porcentual de las siete macroclases en Honduras, 2024



Fuente: Elaboración propia con datos del INE, EPHPM, 2024.

¹ Esta noción es utilizada para caracterizar las estructuras económicas latinoamericanas en las cuales coexisten nichos económicos de alta productividad con otros compuestos por actividades de productividad muy baja.

² Proceso por el cual las actividades de venta de fuerza de trabajo por un salario se convierten cada vez más predominantes en las actividades agrícolas desarrolladas en las zonas rurales de la región.

En segundo lugar, las clases agrícolas representan aproximadamente el 21.7 % de la población ocupada del país, lo que indica que continúan siendo relevantes dentro de la conformación de clases sociales en Honduras. No obstante, como lo han señalado diversos estudios, al comparar el periodo prepandemia y pospandemia, se observa una disminución tanto absoluta como relativa. En efecto, para 2019, las clases agrícolas representaban aproximadamente el 27.0 % de la estructura ocupacional nacional, pero su participación ha disminuido especialmente en las clases de los trabajadores agrícolas por cuenta propia (Llopis et al., 2024). Ese mismo año se estimaban aproximadamente 500 mil trabajadores asalariados agrícolas, cifra que se ha mantenido estable, mientras que los independientes se han reducido a casi la mitad, representando actualmente apenas el 7.2 % de la población ocupada. En consecuencia, la pandemia aceleró la reducción del empleo en las clases agrícolas, especialmente entre trabajadores independientes, entre 2019 y 2023, una tendencia que no se ha modificado en el contexto actual. Esta evolución plantea la necesidad de profundizar en el análisis de la composición y las dinámicas internas de las clases agrícolas en Honduras.

En tercer lugar, aunque las cifras absolutas muestren una baja participación de mujeres en las clases agrícolas, esta situación puede tener diversas interpretaciones analíticas. Una de ellas es el subregistro persistente de la actividad laboral femenina en el sector agrícola, especialmente en labores no remuneradas o de apoyo familiar no contabilizadas por las encuestas tradicionales. Otra razón obedece a que muchas mujeres rurales se encuentran concentradas en el grupo socialmente etiquetado como «ninis», una categoría problemática que invisibiliza su participación en actividades de cuidado, trabajo doméstico no remunerado y su limitada inserción en los circuitos económicos formales, lo cual las margina estructuralmente del mercado laboral.

3.2. Clases sociales y su distribución por sexo

Las condiciones de masculinización y feminización en la estructura de clases sociales se manifiestan de manera más marcada en la distribución por sexo dentro de cada clase. En el caso de los hombres, su distribución no solo responde a una mayor presencia en números absolutos en el mercado laboral, sino también a su concentración en actividades tradicionalmente masculinizadas. Por ejemplo, prácticamente un tercio (32.5 %) del total de hombres ocupados están ubicados en las clases agrícolas, es decir, 3 de cada 10. En contraste, las mujeres en clases agrícolas representan menos del 5 % del total de mujeres ocupadas, como se observa en las Figuras 2 y 3, que muestran la estructura de clases en quince subdivisiones y las siete macroclases.

También, el 16.3 % de los hombres ocupados se encuentran ubicados en las clases asalariadas formalizadas, es decir, que trabajan por un salario en unidades productivas de más de cinco personas y con grado de formalización. Adicionalmente, cerca del 14.6 % pertenecen a la clase de servicios, la cual se caracteriza por un mayor grado de formalización. En síntesis, dos segmentos opuestos, las clases formalizadas y las agrícolas, estas últimas con los niveles más bajos de protección social, representan cada una aproximadamente un 30.0 % de la fuerza laboral masculina. Estas condiciones reflejan la dualidad estructural del mercado de trabajo en Honduras y cómo las clases sociales configuran el acceso a este. Esta dualidad también se expresa en la distribución de los hombres en las demás clases: casi un 20.0 % de los ocupados se ubican en la clase asalariada informal, mientras que aproximadamente un 17.2 % son empleadores o trabajadores independientes. Esto evidencia profundas asimetrías intragénero en la composición de las clases sociales, y convoca a prestar atención a las dinámicas diferenciadas que operan entre los sexos en la estructura de clases del país.

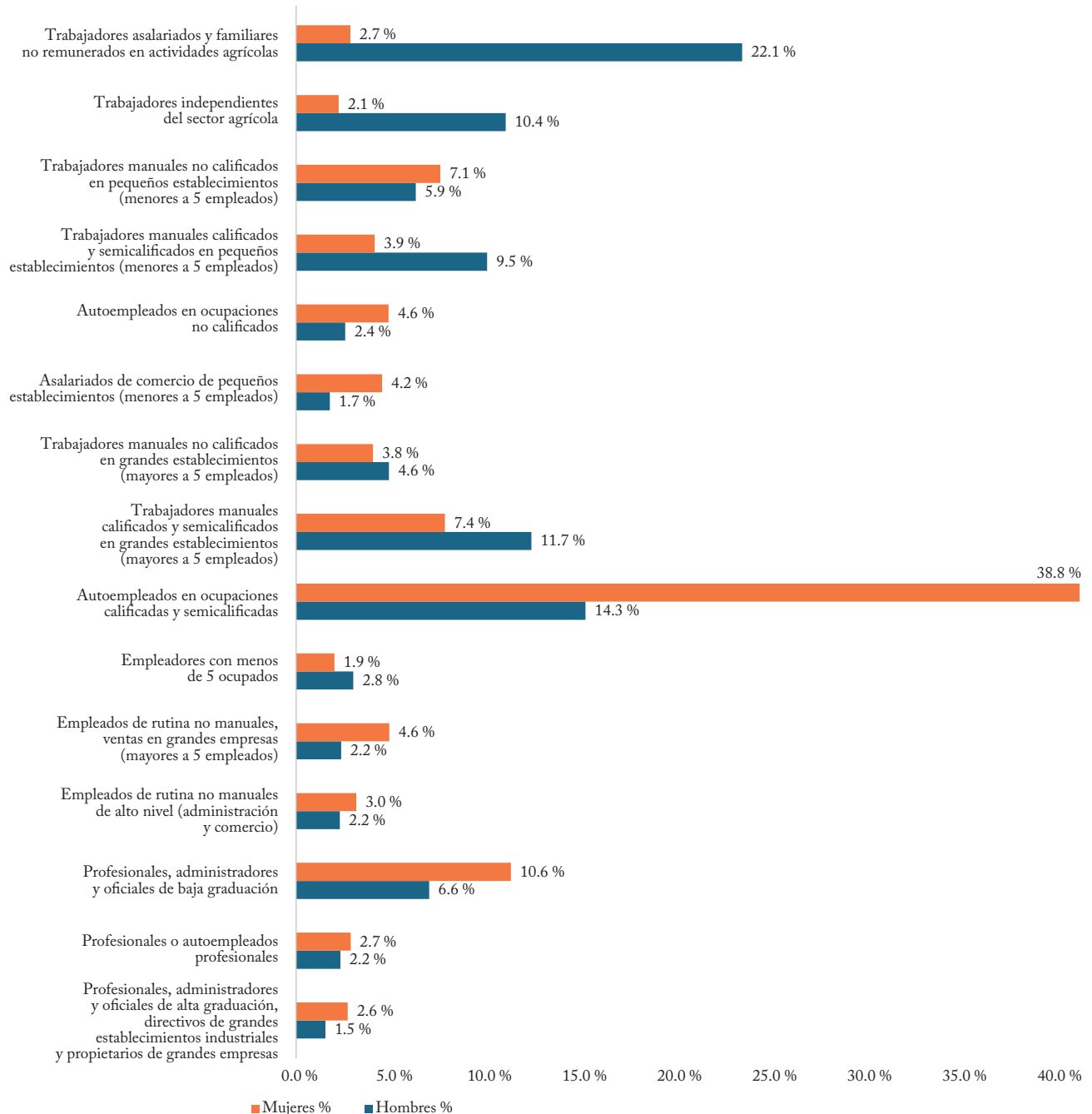
En el caso de las mujeres, los datos muestran también una distribución ocupacional que responde a las lógicas de la división sexual del trabajo, la cual tiende a ser menos diversificada que en el caso de los hombres. Así, del total de mujeres ocupadas, más de un tercio (38.8 %) se ubican como trabajadoras por cuenta propia y calificadas y semicalificadas, lo que significa que, aunque desempeñan tareas que requieren cierto nivel de conocimientos o habilidades, generalmente laboran de manera independiente. Este tipo de inserción laboral está comúnmente vinculado a sectores de servicios y comercio minorista. Si a este grupo se le suman las mujeres empleadoras, la proporción total asciende a poco más del 40.0 % del total de mujeres ocupadas, como se observa en las Figuras 2 y 3.

Por su parte, alrededor del 15.9 % de las mujeres ocupadas se ubican en la clase de servicios, lo cual es significativo considerando la baja participación laboral de las mujeres en un mercado de trabajo tan desigual como el de Honduras, como se observa en el Figura 3. Sin embargo, una proporción importante de estas mujeres pertenece a la clase de profesionales con baja calificación. Resulta especialmente relevante que, en términos relativos al interior de cada sexo, la presencia de mujeres en las clases de servicios es proporcionalmente más alta que la de los hombres.

Esto significa que, del total de mujeres que participan en el mercado laboral, el cual, en términos absolutos, representa una cifra relativamente baja, un porcentaje relevante de ellas se agrupa en clases ocupacionales relativamente bien remuneradas y con mayor estabilidad laboral, como la de los de servicios y las clases de trabajos rutinarios formales. En este aspecto, debe incluirse a las trabajadoras asalariadas del sector formal, que representa un 11.2 % del total de mujeres ocupadas. Así, prácticamente un tercio de las mujeres que se integra al mercado de trabajo lo hace en las clases con un cierto grado de formalización laboral.

Figura 2

Esquema de quince subdivisiones de clase y su distribución por sexo

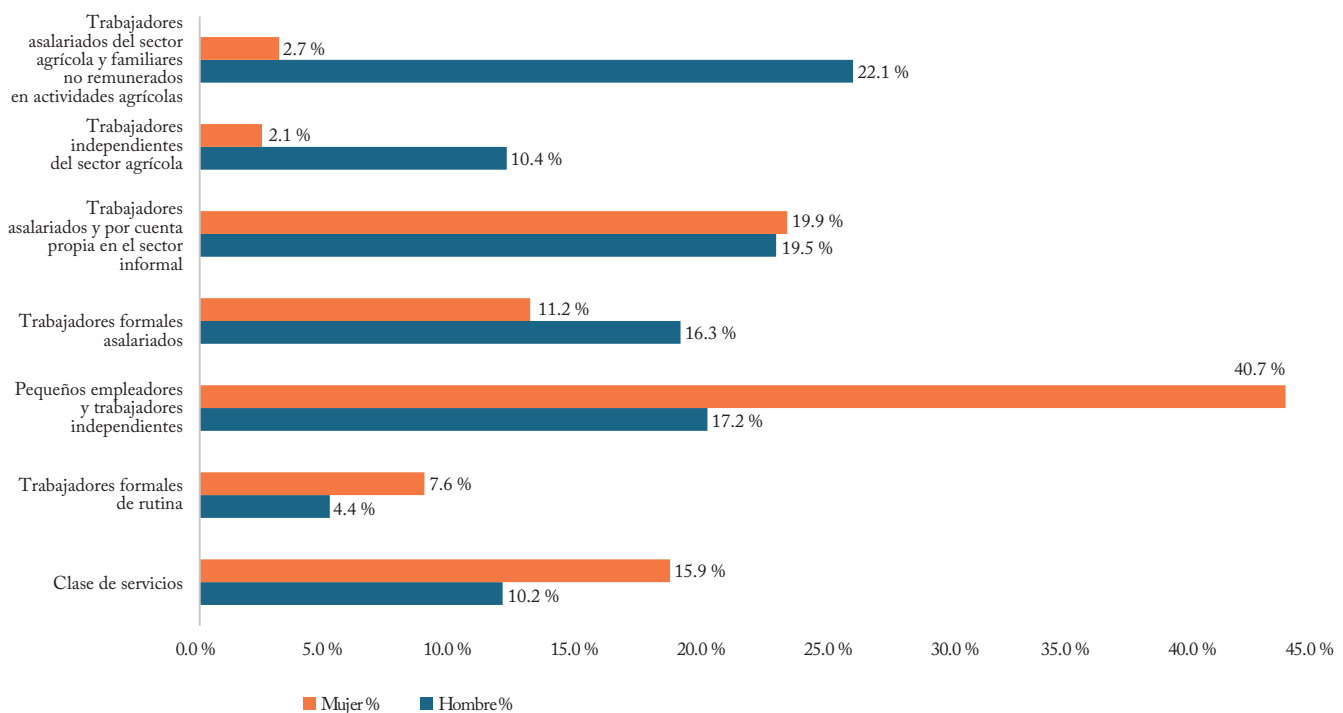


Fuente: Elaboración propia con datos del INE, EPHPM, 2024.

Las asimetrías en la estructura de clases al interior de cada sexo quedan de manera más evidente cuando se analizan las posiciones ocupacionales diferenciadas. Así, mientras 3 de cada 10 mujeres se ubican en clases de servicios y no manuales, otras 2 pertenecen a la clase de asalariadas informales, las cuales trabajan en condiciones de alta precariedad y con limitado acceso a derechos laborales. En cambio, 4 de cada 10 mujeres se desempeñan como trabajadoras por cuenta propia calificadas o semicalificadas, como se observa específicamente en la Figura 2, lo que implica diferentes niveles de calificación e informalidad, pero bajo condiciones diferenciadas respecto a las clases agrícolas. En síntesis, los datos permiten mostrar la importancia de comprender el análisis tanto a nivel de macroclases como en sus subdivisiones en clave de género, especialmente en contextos de alta informalidad y segmentación del mercado laboral.

Figura 3

Esquema de siete macroclases y su distribución dentro de cada sexo



Fuente: Elaboración propia con datos del INE, EPHPM, 2024.

3.3. Clases sociales y su distribución geográfica

La distribución geográfica de la estructura de clases permite entender su composición en un país en donde la población rural aún conserva un peso demográfico importante, representando un 44.4 % del total, según la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del INE en 2024. Para simplificar el análisis, de aquí en adelante se expondrán solamente los datos a nivel de las siete macroclases sociales. De esta manera, la Figura 4 muestra dicha distribución entre las personas ocupadas, según su clase social, en los dominios urbano y rural. Los datos permiten establecer tres premisas clave sobre la conformación de clases.

En primer lugar, las zonas urbanas, por razones asociadas a la dinámica económica, se caracterizan por el predominio de una composición de las clases con mayores niveles de asalarización y formalización laboral. En efecto, si se agrupan las clases asociadas con niveles de calificación media y alta, trabajos relativamente estables y vínculos laborales asalariados en diversos sectores económicos, estas representan aproximadamente el 45.0 % de las

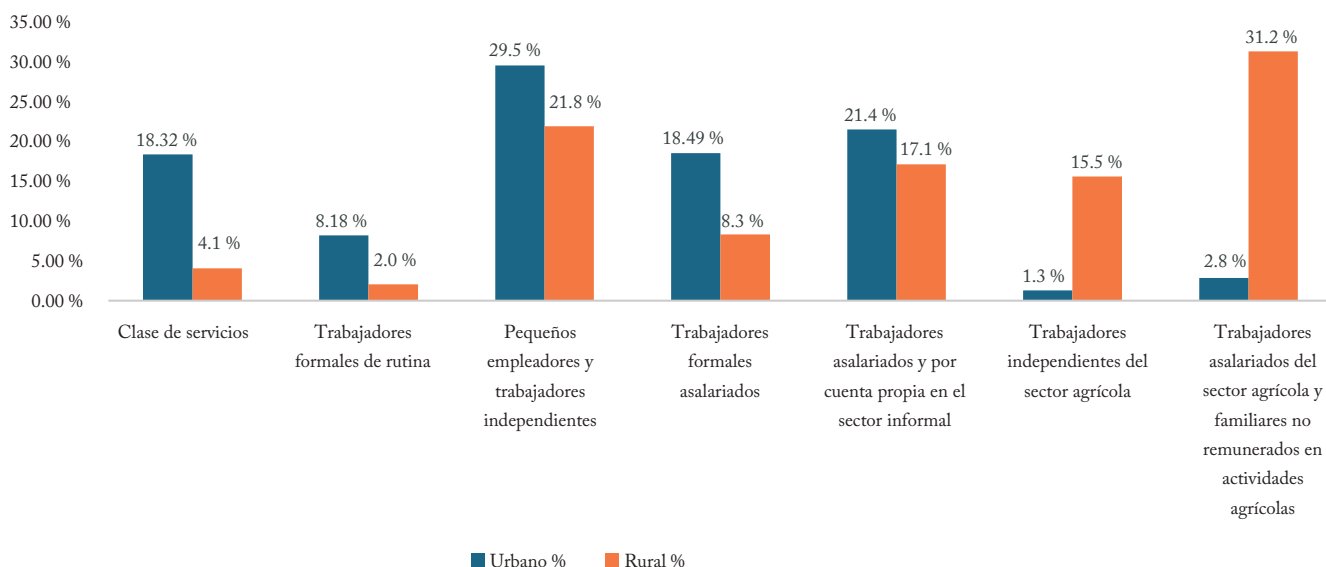
personas ocupadas en zonas urbanas. En cambio, en las zonas rurales, dichas clases apenas alcanzan el 14.0 % de la población ocupada. Aun así, resulta interesante reconocer la progresiva presencia de estas clases en los entornos rurales. En efecto, la existencia de ocupaciones formales, así como de trabajadores por cuenta propia calificados, evidencia tendencias hacia una mayor heterogeneidad ocupacional en el campo y, en consecuencia, una reconfiguración de la estructura de clases rurales. Sin embargo, es clara la persistencia de un predominio de las clases de asalariados en condición de informalidad y clases agrícolas.

En segundo lugar, las zonas urbanas y rurales comparten un rasgo común. En ambas, las clases de pequeños empleadores y trabajadores por cuenta propias calificados, así como asalariados en condiciones de informalidad laboral (es decir, quienes trabajan en unidades productivas de pequeña escala), tienen un peso significativo. En otras palabras, se trata de un amplio contingente de trabajadores que se ubican en distintos grados de informalidad, con condiciones laborales variadas según intensidad y tipo de ocupación, así como asalariados que carecen de acceso efectivo a derechos laborales y de protección social. En las zonas urbanas, este grupo representa cerca de la mitad de la población ocupada, mientras que en las zonas rurales equivale aproximadamente al 39.0 % del total de ocupados.

En tercer lugar, las clases agrícolas siguen siendo centrales en las zonas rurales, aunque, como se ha indicado previamente en otras investigaciones (Llopis, et al., 2024), su presencia tanto en términos absolutos como relativos ha disminuido de manera sostenida en los últimos años, acentuándose después de la pandemia. En efecto, es posible observar diferentes condiciones de asalarización en las zonas rurales del país, tanto a nivel formal como informal, tanto en actividades agrícolas como fuera de ellas. Sin embargo, es pertinente hacer notar que es una tendencia en América Latina la recomposición laboral a partir de las políticas neoliberales, las cuales han intensificado la precarización y exclusión en el empleo, pero también han propiciado la transformación de la estructura ocupacional en el campo (Kay, 2016). En consecuencia, vale señalar que tales cambios que están aconteciendo en el mundo rural reflejan una progresiva desagrarización³ y diversificación socioproductiva, hipótesis que deberá ser investigada de manera más sistemática.

Figura 4

Esquema de siete macroclases sociales y su distribución por dominio geográfico



Fuente: Elaboración propia con datos del INE, EPHPM, 2024.

³ Este concepto alude al proceso por el cual el peso económico y social de las actividades agrícolas se va reduciendo progresivamente como resultado de las transformaciones productivas ocurridas en un país, especialmente en las zonas rurales.

3.4. Clases sociales y composición etaria

Cuando se observa la posición de clase con respecto a la edad de los ocupados es importante precisar algunas consideraciones metodológicas y analíticas. En primer lugar, los estudios sobre estratificación social suelen trabajar con la población económicamente activa entre 15 y los 64 años, en concordancia con la noción de edades productivas (Chávez Molina et al., 2022). En este caso, se decidió incluir explícitamente al grupo de 15 a 19 años como un quinquenio diferenciado, con el propósito de mostrar que la inserción de este segmento generalmente se concentra en ciertas clases, dadas sus características etarias. El resto de rango de edad ha sido elaborado con base en 10 años para simplificar la presentación de las siete macroclases. Así, los decenios de edad son presentados de la siguiente manera: 20-29, 30-39, 40-49 y 50-59. Finalmente, se decidió ubicar a la población adulta mayor desde los 60 años en adelante, con el fin de analizar la presencia y el peso relativo de estos segmentos etarios dentro de la estructura de clases. Por esta razón, la clasificación etaria está más orientada a mostrar la composición general según la edad actual de la persona y la ocupación que desempeña en este momento.

En segundo lugar, los segmentos etarios juveniles y adultos mayores representan condiciones diferenciadas tanto en términos de posición de clase como de inserción laboral, y su peso relativo debe ser considerado en el análisis. Para el caso, aproximadamente 270 mil personas ocupadas tienen entre 15 y 19 años, lo que equivale a cerca del 7.5 % del total de ocupados; mientras que las personas de 60 años y más representan el 11.8 %. Esto motiva a segmentar de esta manera la estructura de edad, con el fin de captar la distribución etaria al interior de las clases sociales. En este caso, se realizará tanto el análisis de la distribución de las posiciones de clase según grupos de edad, como de la composición etaria dentro de cada clase, con el propósito de complejizar y problematizar las dinámicas intergeneracionales en el mundo del trabajo. Esto obedece a dos propósitos. Primero, esbozar, a manera general, una caracterización de los componentes intergeneracionales de la estructura de clases sociales, así como su ubicación en un momento histórico específico. Segundo, mostrar cómo está compuesta una clase social determinada en términos de edades, lo cual permite establecer un perfil etario de dichas macroclases.

La Figura 5 muestra que la inserción laboral en función de la edad es factor determinante con respecto a la posición de clase en la cual una persona inicia y desarrolla sus actividades productivas en el mercado de trabajo. Para el caso, de los más de 270 mil jóvenes entre 15 y 19 años que desempeñan alguna actividad laboral, se observa que aproximadamente 6 de cada 10 (64.5 %) se concentran en las macroclases de asalariados y trabajadores por cuenta propia informales, como asalariados en actividades agrícolas o, en su defecto, como trabajadores familiares no remunerados en este sector. Esto expone las condiciones de vulnerabilidad y precariedad asociadas con los jóvenes, quienes en su mayoría acceden únicamente a empleos de baja calificación y limitada protección social (Michel & Walker, 2019).

A medida que se ubican en rangos de edad más amplios (a partir de los 20 años, agrupados en decenios), se observa una configuración etaria diferenciada de las posiciones de clase. En el caso de los jóvenes entre 20 y 29 años, que suman más de 889 mil personas, se identifica una mayor inserción en empleos formales, dado que las macroclases de trabajadores de servicios, ocupaciones rutinarias y asalariados en condición de formalidad representan cerca del 45.0 % de la fuerza laboral en esas edades. No obstante, aproximadamente un 36.0 % se ubica en las macroclases de trabajadores por cuenta propia, asalariados informales y trabajadores independientes, lo que evidencia una marcada dualidad en la distribución de los jóvenes ocupados según clase social y tipo de inserción en el mercado laboral.

Estas condiciones se observan también en las personas entre 30 y 39 años, un segmento poblacional que concentra a más de 815 mil personas ocupadas. En este grupo, aproximadamente un 38.0 % se ubica en las macroclases más formalizadas (trabajadores de servicios, ocupaciones rutinarias formales y asalariados formales), mientras que los trabajadores por cuenta propia, asalariados informales y trabajadores independientes representan alrededor del 43.0 %. En efecto, esto pone de relieve la persistencia de brechas en la inserción laboral según edad, con una proporción importante de trabajadores vinculados a clases más informales o desempeñándose en ocupaciones de menor calificación y limitada estabilidad.

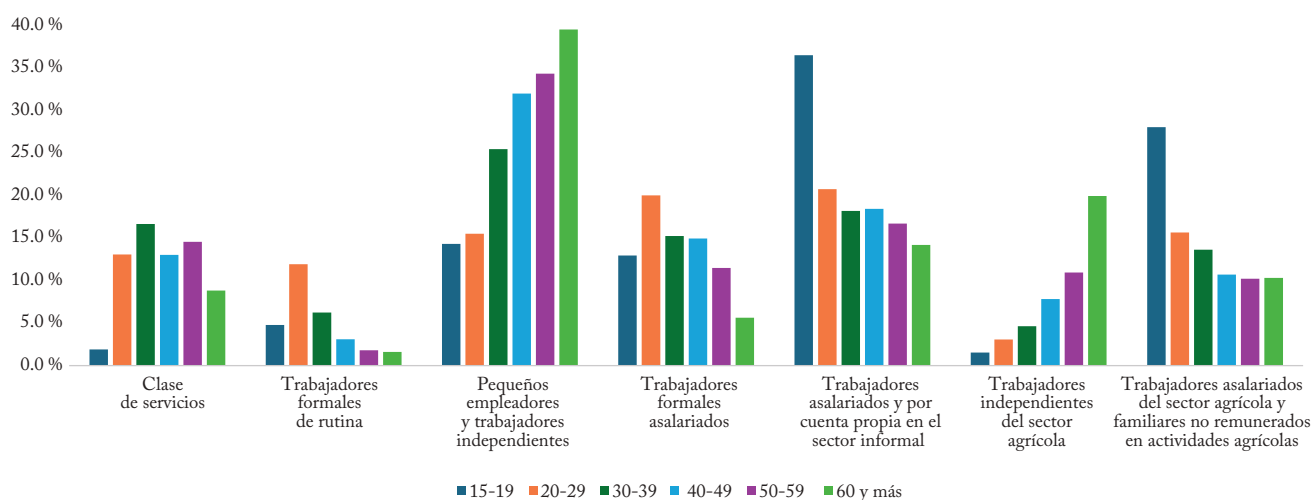
Al analizar las edades comprendidas entre los 40 a 49 años y 50 a 59 años, un amplio segmento que agrupa a más de 1.2 millones personas, se observa que su inserción laboral en las macroclases más formalizadas oscila entre un 27.0 % y un 31.0 %, respectivamente, lo cual evidencia una disminución progresiva en la formalización del empleo a medida que avanza la edad. En cambio, en las clases de trabajadores por cuenta propia y asalariados en condiciones

de informalidad se concentra más de la mitad del total de personas ocupadas en estos grupos etarios. Por su parte, en estas edades, las clases vinculadas a la actividad agrícola comienzan a tener un mayor peso nuevamente, con un 17.0 % y un 21.0 %, respectivamente, en cada uno de estos decenios. En otras palabras, a medida que aumenta la edad, se incrementa la probabilidad de estar ubicado en una clase social caracterizada por condiciones de informalidad, baja calificación ocupacional o vinculación al sector agrícola, lo cual revela patrones estructurales de segmentación laboral y exclusión progresiva del empleo formal en el ciclo de vida laboral.

Finalmente, las personas mayores de 60 años, que representan una población ocupada superior a las 426 mil personas, muestran una composición bastante particular debido a sus características sociodemográficas y trayectorias laborales acumuladas. Prácticamente 5 de cada 10 se desempeñan como trabajadores por cuenta propia con algún nivel de calificación o como asalariados en condición de informalidad, mientras que aproximadamente 2 de cada 10 son trabajadores independientes del sector agrícola y 1 de cada 10 es asalariado agrícola. En otras palabras, la población ocupada de 60 años o más presenta una inserción probablemente con menor movilidad social durante su trayectoria laboral, ya que a su edad permanecen en posiciones de clase caracterizadas por empleos concentrados en segmentos laborales de baja protección social y menor estabilidad.

Figura 5

Distribución porcentual de clases sociales por grupos de edad



Fuente: Elaboración propia con datos del INE, EPHPM, 2024.

Establecer la composición etaria al interior de cada clase social permite conocer si está compuesta predominantemente por un grupo de edad específico. Los datos de la Figura 6 muestran que las clases con mayores niveles de formalización y calificación (las macroclases de servicios profesionales y trabajadores formales de rutina) se concentran principalmente entre personas de 20 a 39 años, es decir, población juvenil y adultos jóvenes, representando aproximadamente un 55.0 % y un 75.0 % del total en cada una, respectivamente. Esto indica que un importante segmento de las personas ocupadas nacidas entre 1984 y 2004 se han insertado en el mercado laboral dentro de estas posiciones de clase social. En efecto, el promedio de edad para la clase de servicios es de 40 años, mientras que para la clase de formales de rutina es de 30 años, evidenciando una diferencia de 10 años entre ambas. Por su parte, aproximadamente un 58.0 % de los asalariados formales también se encuentra en estos rangos etarios, con un promedio de edad de 35 años, lo cual la posiciona en un punto intermedio entre las dos clases anteriores. En cambio, los trabajadores asalariados informales y los trabajadores por cuenta propia en condiciones de informalidad presentan una estructura etaria relativamente similar, pero con mayor presencia de personas jóvenes, lo que corrobora que, en cierta medida, la juventud continúa enfrentando procesos de inserción laboral marcados por la

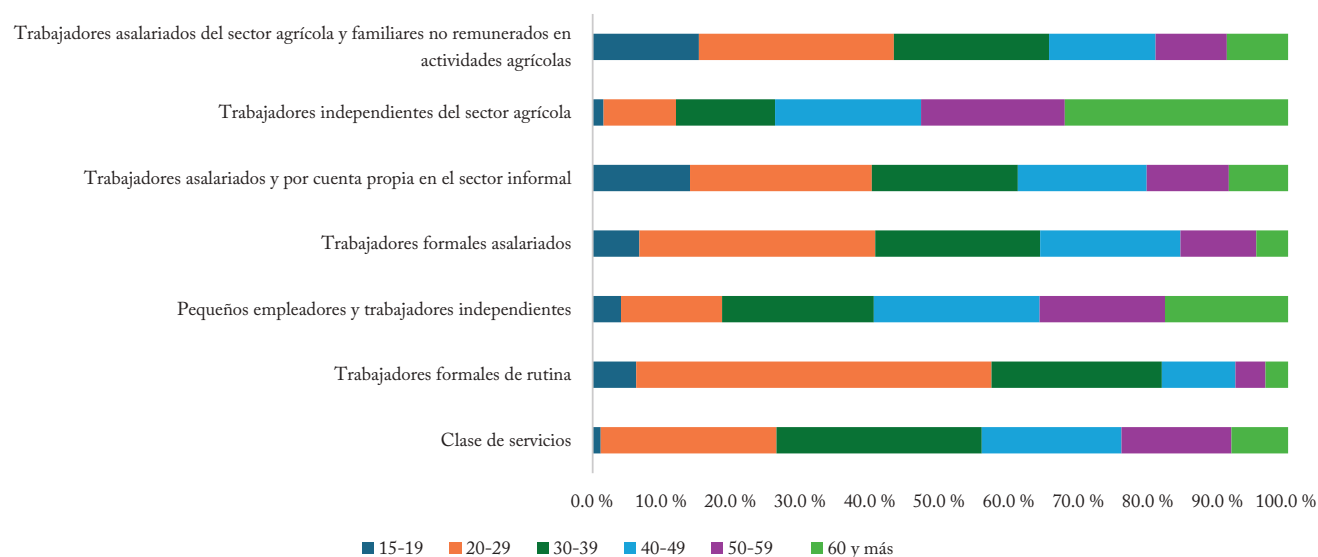
informalidad y la baja calidad del empleo. Su posición de clase, en términos laborales, los ubica en la condición de informalidad con relativa calificación.

En cambio, la estructura etaria de las clases de trabajadores independientes no agrícolas y pequeños empleadores es notablemente mayor. En este caso, más de la mitad de las personas ubicadas en esta clase tiene más de 40 años, con un promedio de edad de 43 años, lo que sugiere una consolidación ocupacional posterior en segmentos de trabajo por cuenta propia. Por su parte, las clases agrícolas exhiben los dos extremos de la distribución etaria dentro de las clases sociales. Los trabajadores independientes agrícolas, que realizan tareas de cultivo de distintos tipos, experimentan un progresivo envejecimiento, ya que más de la mitad de las personas en esta clase tiene más de 50 años. Estos datos coinciden con las advertencias de los estudios rurales sobre las transformaciones estructurales del campo, particularmente en relación con la recomposición del empleo agrícola y el envejecimiento poblacional en zonas rurales. En cambio, los trabajadores agrícolas asalariados presentan un perfil etario más joven, ya que un 43.0 % tiene menos de 30 años, con un promedio de edad de aproximadamente 33 años. Esta situación plantea desafíos adicionales, dado que investigaciones previas advierten que un porcentaje significativo del trabajo infantil y juvenil en las zonas rurales se inserta en actividades agrícolas, tanto remuneradas como no remuneradas, lo que evidencia una persistente precarización de las trayectorias laborales tempranas en contextos rurales (INE et al., 2023).

Estos datos evidencian la heterogeneidad etaria vinculada a la posición de clase de las personas ocupadas, es decir, la edad promedio y la distribución por grupo etario varían significativamente según la ubicación en la estructura de clases. Precisamente, los informes sobre desarrollo rural enfatizan que tanto los promedios de edad como la composición de la fuerza laboral agrícola son diversos (IFAD, 2019). En este sentido, el análisis desde la perspectiva de clase social permite profundizar en la comprensión de la estructura etaria diferenciada entre clases sociales en las zonas rurales, especialmente en aquellas dedicadas a la actividad agrícola. Asimismo, debe considerarse que dicha composición ha experimentado transformaciones a lo largo del tiempo, como se observó en la Figura 3: las zonas rurales presentan hoy una mayor heterogeneidad, no solo por la presencia creciente de distintas clases sociales, sino también por la coexistencia de jóvenes y adultos en las clases agrícolas, lo que refleja una estructura etaria mixta y una recomposición sociodemográfica del trabajo rural.

Figura 6

Composición etaria según clase social, 2024



Fuente: Elaboración propia con datos del INE, EPHPM, 2024.

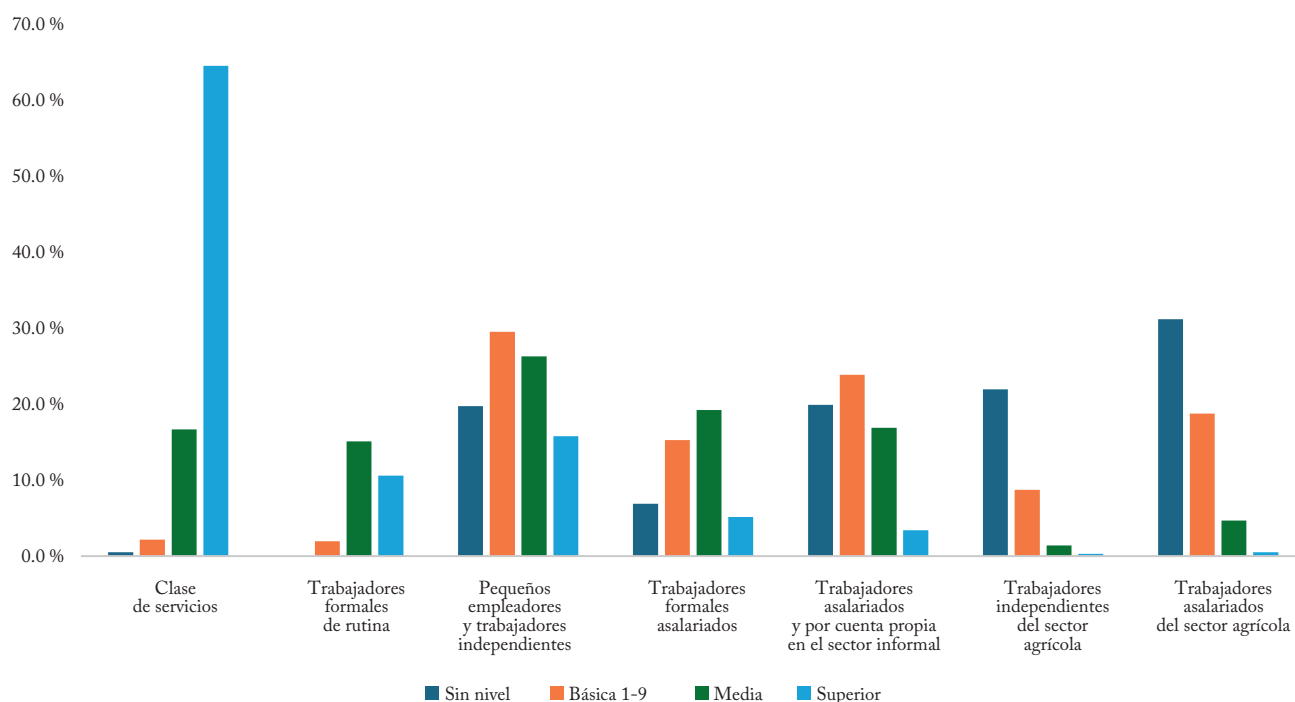
3.5. Clase social y educación

Los estudios sobre estructura de clases y movilidad social intergeneracional enfatizan que las credenciales educativas desempeñan un papel significativo en las sociedades modernas, al constituirse como mecanismos legítimos de acceso a ocupaciones que requieren cierto nivel de calificación técnica o profesional (Boado Martínez, 2022). Para el caso, no es posible ejercer funciones de administración o gerencia sin cumplir con un umbral mínimo de formación educativa que respalde las competencias requeridas para dichos cargos. Aun así, incluso si un padre es médico, su ocupación no puede ser directamente transmitida a sus hijos o hijas sin mediar un proceso educativo formal: ellos deben cursar estudios y obtener los títulos que les acrediten la formación académica correspondiente, lo cual ocurre a través del sistema educativo. Por lo tanto, un análisis de la estructura de clases en función del nivel educativo permite establecer los vínculos entre la adquisición de capital educativo y las posiciones ocupacionales que las personas alcanzan en el mercado de trabajo.

Los datos de la Figura 7 permiten establecer el vínculo entre el nivel educativo alcanzado y la posición ocupacional asociada a una determinada clase social. Para el caso, de las 434 mil personas con estudios superiores, prácticamente un 75.0 % se concentra en las clases de servicios profesionales y trabajos formales de rutina, lo cual evidencia la fuerte relación entre la formación terciaria y el acceso a ocupaciones que exigen un nivel específico de calificación técnica o profesional. Por su parte, al observar a los ocupados con educación media completa —es decir, quienes finalizaron la secundaria—, que suman aproximadamente 777 mil personas, su distribución es más heterogénea: un 31.0 % se ubica en las mismas clases de servicios y formales de rutina, mientras que un 26.0 % corresponde a trabajadores independientes o empleadores, un 19.2 % a asalariados formales y un 16.8 % a personas ocupadas en condiciones de informalidad. Estos datos reflejan una mayor segmentación en el mercado laboral para quienes poseen únicamente educación media, en comparación con quienes acceden a estudios superiores, lo que evidencia la persistencia de barreras estructurales vinculadas al capital educativo.

Figura 7

Distribución porcentual de las clases sociales por nivel educativo



Fuente: Elaboración propia con datos del INE, EPHPM, 2024.

En cambio, los ocupados con educación básica, quienes representan el mayor contingente de la fuerza laboral ocupada con 2 millones 169 mil personas, tienen una presencia marginal en las clases más formalizadas, como los servicios profesionales y los trabajos formales de rutina. Apenas un 15.2 % de los asalariados formales posee educación básica completa, entendida como la finalización de los nueve años de estudios obligatorios, los cuales constituyen el estándar nacional para este nivel educativo. Por su parte, las personas con este tipo de educación se concentran mayoritariamente en ocupaciones de baja calificación, como los pequeños trabajadores por cuenta propia (29.5 %) y los asalariados y cuenta propia en condiciones de informalidad (21.9 %). Esto significa que la mayoría de quienes no culminan estudios de secundaria o universidad tienden a insertarse en ocupaciones precarias, predominantemente en contextos urbanos. Finalmente, alrededor del 30.0 % de las personas ocupadas con educación básica desempeñan labores asociadas al trabajo agrícola asalariado, lo cual subraya la persistencia de vínculos entre bajo nivel educativo, trabajo rural y segmentación ocupacional. Esta evidencia resalta la necesidad de analizar las trayectorias educativas y laborales en función de la estructura de clases sociales, con el fin de comprender más profundamente los factores que condicionan el acceso, permanencia y culminación del sistema educativo.

Un aspecto relevante es la distribución ocupacional de las personas que no poseen credenciales educativas formales. Estas suman aproximadamente 282 mil, de las cuales la mitad se encuentra concentrada en las clases agrícolas, ya sea como asalariados agrícolas o como trabajadores agrícolas independientes. El resto se distribuye entre clases vinculadas a la economía informal urbana, incluyendo trabajadores por cuenta propia informales, asalariados sin protección laboral o pequeños empleadores de baja escala. Estos datos evidencian una relación estructural entre la falta de certificación educativa y la inserción en ocupaciones de baja calificación, inestabilidad laboral y limitada protección social, lo cual condiciona el desempeño de una posición socioocupacional específica dentro de la estructura de clases en Honduras.

4 Conclusiones

- El perfil sociodemográfico de las clases sociales contribuye a establecer algunos retos analíticos y líneas de investigación prioritarias para fortalecer la producción científica sobre esta temática en Honduras. Se destacan dos desafíos metodológicos y cuatro líneas generales de investigación. En primer lugar, un desafío metodológico central consiste en profundizar en la validez y pertinencia del modelo EGP (Erikson-Goldthorpe-Porto-carrero), adaptando sus dimensiones a las condiciones socioeconómicas y ocupacionales propias del contexto hondureño. Los estudios previos, así como los hallazgos presentados en este boletín, demuestran la utilidad conceptual y operativa del modelo, pero resulta fundamental avanzar en la discusión sobre la dualidad entre formalidad e informalidad, los criterios productivos para medir el tamaño de las unidades económicas y el refinamiento de la clasificación ocupacional según su correspondencia con la posición de clase.
- En segundo lugar, un desafío metodológico relevante para futuras investigaciones radica en la captura adecuada de las clases sociales con mayor capital económico, es decir, los propietarios y controladores de los medios de producción. Generalmente, las encuestas de hogares enfrentan limitaciones importantes para acceder y obtener información confiable sobre este grupo poblacional, debido a factores como la subdeclaración, la baja representatividad y las dificultades en el muestreo. Por ello, las investigaciones recientes han optado por combinar datos de encuestas de hogares con información proveniente de declaraciones tributarias y registros administrativos, lo que permite construir una imagen más precisa y depurada sobre la distribución del ingreso, especialmente en los deciles más altos. En efecto, un estudio del Banco Mundial indica que los deciles más ricos suelen mostrar una alta persistencia a lo largo del tiempo, evidenciando una desigualdad estructural significativa y la concentración sostenida de la riqueza (Del Carmen et al., 2024). En consecuencia, desde el análisis del ingreso se puede demostrar que la clase social continúa siendo un factor determinante para el acceso y la distribución desigual de recursos sociales y económicos.

- Con respecto a las líneas de investigación, pueden destacarse, brevemente, algunas prioridades temáticas. Primero, resulta pertinente investigar y desarrollar una tipología de hogares basada en la posición de clase de sus miembros en Honduras. Esto permitiría problematizar la composición y diversidad de clase dentro de los hogares, dado que muchos hogares pueden presentar configuraciones más homogéneas o heterogéneas, dependiendo de diversos factores sociales y económicos. Segundo, es necesario profundizar en la relación entre clase social y acceso a derechos básicos, tales como salud y pensiones, para comprender de qué manera esta condición facilita o limita el acceso a ocupaciones que aseguren un piso mínimo de protección social. Tercero, es innegable que uno de los principales mecanismos de reproducción de las desigualdades se manifiesta en el mercado laboral, por lo que el análisis conjunto de ingreso y clase social emerge como una dimensión central para el estudio de la estructura social. Finalmente, un tema relevante a abordar es la composición de las clases sociales tanto en Honduras como entre los compatriotas migrantes en el exterior, reconociendo que la posición de clase de los migrantes constituye un eje fundamental para entender procesos de movilidad social y exclusión en contextos transnacionales.

4 Referencias bibliográficas

- Boado Martínez, M. (2022). La movilidad social en Buenos Aires y Montevideo de 1960 a 2012. *Empiria*, 25-55. <https://doi.org/10.5944/empiria.55.2022.34181>
- Briceño, R. (2022). *Transformaciones estructurales de relaciones de clases sociales. El caso de la formación social hondureña en contexto de la globalización capitalista e instauración del Estado neoliberal, 1990-2018*. UNAH.
- Chávez Molina, E., Cobos, D., & Solís, P. (2022). Estructura de clases, heterogeneidad del mercado laboral y condiciones de vida en América Latina. *Realidad Económica*, 65-102.
- Del Carmen, G., Garriga, S., Wilson, N., & Scot, T. (2024). *Two Decades of Top Income Shares in Honduras*. World Bank.
- IFAD. (2019). *2019 Rural Development Report. Creating Opportunities for Rural Youth*. IFAD.
- INE, Vision, W., SETRASS, SENAF, & OIT. (2023). *Encuesta Nacional de Trabajo Infantil*. INE.
- Kay, C. (2016). La transformación neoliberal del mundo rural: procesos de concentración de la tierra y el capital y la intensificación de la precariedad del trabajo. *Revista Latinoamericana de Estudios Rurales*, 1-26.
- Llopis, J., Pineda Talavera, D., Cruz, K., & Pineda Talavera, M. (2024). Caracterización de la estructura de clases sociales en Honduras (2019 y 2023). *Laboratorio*.
- Michel, V., & Walker, I. (2019). *Honduras: diagnóstico del trabajo*. Banco Mundial.
- Pineda Talavera, M. (2018). *La transformación de la estructura de clases sociales en Honduras, durante el actual modelo de acumulación (2006, 2010 y 2013)* [Tesis de maestría]. Universidad de Costa Rica.
- Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P., & Elbert, R. (2020). *El análisis de clases sociales: pensando la movilidad social, la residencia, los lazos sociales, la identidad y la agencia*. CLACSO.
- Solís, P., & Boado, M. (2016). *Y, sin embargo, se mueve... estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina*. COLMEX.

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Rector: Dr. Odir Aarón Fernández Flores

Vicerrectora académica: Dra. Lourdes Rosario Murcia Carbajal

Facultad de Ciencias Sociales

Decana: Mtr. Carmen Julia Fajardo Cardona

Instituto de Investigaciones Sociales

Director: Dr. Héctor Alcides Figueroa Escobar

Investigador responsable

Mtr. José Octavio Llopis Hernández¹

Correo electrónico: jose.llopis@unah.edu.hn

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7939-705X>

Editorial Universitaria

Director: Dr. Carlos Ordóñez

Editores jefes: Mtr. Dilia Martínez

Corrección de estilo

Dr. Héctor Alcides Figueroa Escobar

Mtr. Kevin Alberto Cruz Cerrato

Lic. Silvia Matute

Diseño y diagramación

Lic. Daniela Lozano

Lic. Luis Matute

©Instituto de Investigaciones Sociales, Observatorio Demográfico
Universitario, edificio C3, 4.º nivel, aula 403, Tegucigalpa, Honduras.

Este boletín es de acceso abierto. Su contenido puede utilizarse, reproducirse y compartirse libremente en cualquier medio, siempre que se cite la fuente y se reconozca la autoría. Se prohíbe su venta o utilización con fines comerciales.

¹ Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Máster en Sociología por FLACSO-Ecuador. Docente e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (UNAH). Miembro del grupo de trabajo «Desigualdades comparadas: clase social, género y etnia» (CLACSO) y coordinador del grupo de investigación «Estructura social, movilidad de clases sociales y reproducción de las desigualdades sociales» del Departamento de Sociología. Sus actuales líneas de investigación son la sociología económica, los mercados laborales y la desigualdad social.